

RECOMENDACIONES FINALES PARA LA RECONVERSIÓN Y RECUALIFICACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN VINCULADA A LA PRÁCTICA DE LA VENTA IRREGULAR DE GASOLINA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CRUZ, LA UNIÓN, SAN PABLO Y CONTADERO

1. Recomendaciones Finales Municipio de la Cruz

El proceso de caracterización territorial desarrollado en el municipio de La Cruz permitió identificar un territorio profundamente rural, con una población resiliente y trabajadora que sostiene su economía a través de actividades agrícolas, negocios pequeños informales y redes comunitarias de apoyo. Aunque el municipio enfrenta desafíos estructurales asociados a la dispersión geográfica, la pobreza multidimensional, la baja escolaridad y la limitada oferta de empleo formal, también posee un capital social significativo y una población con interés creciente en procesos de formación, reconversión laboral y fortalecimiento productivo.

A partir de los resultados obtenidos, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas para avanzar hacia un desarrollo local más sostenible, inclusivo y adaptado a la realidad territorial de La Cruz en donde hay que fortalecer las capacidades locales y la formación técnica pertinente. Se recomienda consolidar programas de formación ocupacional y reconversión laboral en alianza con el SENA, la Alcaldía Municipal y organizaciones comunitarias, priorizando temas acordes a la economía local: técnicas agrícolas mejoradas, emprendimiento rural, transformación de alimentos, estética, cocina, comercio digital, oficios prácticos y mantenimiento de motocicletas. Los procesos deben ser modulares, itinerantes y adaptados a la disponibilidad de tiempo de mujeres jefas de hogar y población rural, incorporando alfabetización digital, educación financiera y certificación de saberes.

Se deben, impulsar iniciativas productivas asociativas y redes de economía solidaria. Es necesario promover la creación y fortalecimiento de asociaciones campesinas, grupos de mujeres emprendedoras y redes comunitarias orientadas a mejorar la comercialización de productos, reducir costos, acceder a créditos y recibir asistencia técnica. La asociatividad permitirá que los pequeños productores, principalmente del sector agrícola, transiten de la subsistencia a modelos

productivos más articulados, incorporando prácticas de valor agregado, comercialización conjunta y acceso a insumos y mercados.

Además, establecer una *mesa territorial de fortalecimiento económico y reconversión rural*, integrada por la Alcaldía, el SENA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, las JAC y representantes comunitarios. Este espacio permitirá coordinar programas, descentralizar la oferta institucional hacia las veredas, mejorar la focalización de recursos y realizar un seguimiento conjunto a los procesos de formación, emprendimiento y generación de ingresos.

Es necesario desarrollar alternativas sostenibles frente a la venta informal de combustibles, dado el rol funcional que esta práctica cumple en las veredas se recomienda diseñar alternativas graduales que respeten la economía de las familias involucradas. Estas pueden incluir servicios comunitarios de transporte regulado, programas de mecánica de motos, microcentros de abastecimiento seguro, emprendimientos agroecológicos y fortalecimiento de tiendas rurales. Asimismo, deben adelantarse campañas pedagógicas sobre riesgos asociados, seguridad energética y manejo adecuado de combustibles. Así mismo hay que promover un enfoque diferencial e inclusión social. Las estrategias de formación y reconversión laboral deben priorizar la participación de mujeres jefas de hogar, jóvenes rurales, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad. Es fundamental garantizar igualdad de oportunidades, adecuación territorial de la oferta y reducción de barreras derivadas de la movilidad, el cuidado y las condiciones económicas. Este enfoque permitirá que la transición hacia actividades más sostenibles sea equitativa y pertinente.

Se recomienda integrar los hallazgos de esta caracterización en el Plan de Desarrollo Municipal, el POT y los instrumentos de inversión territorial. Las prioridades deben centrarse en mejorar la movilidad rural, ampliar la conectividad digital, fortalecer infraestructura productiva (centros de acopio, espacios de capacitación, unidades comunitarias de transformación), y promover cadenas agrícolas que fortalezcan el mercado local.

Por último, implementar un sistema participativo de monitoreo y evaluación.

Es necesario establecer un mecanismo de seguimiento local, construido con

juntas de acción comunal, líderes comunitarios y entidades del nivel municipal y departamental. Este sistema deberá medir avances en reconversión laboral, fortalecimiento productivo, inclusión social y mejoras en la calidad de vida. La participación comunitaria garantizará transparencia, corresponsabilidad y continuidad del proceso. En conjunto, estas recomendaciones ofrecen una hoja de ruta coherente y contextualizada para impulsar un desarrollo territorial sostenible en La Cruz, que reconozca su ruralidad, potencie sus capacidades comunitarias y brinde nuevas oportunidades económicas para las familias más vulnerables. La articulación institucional, la formación pertinente y el fortalecimiento del tejido social serán elementos fundamentales para avanzar hacia un municipio más justo, productivo y resiliente.

2. Recomendaciones Finales Municipio de La Unión.

El proceso de caracterización territorial y socioeconómica desarrollado en el municipio de La Unión permitió identificar una comunidad resiliente, trabajadora y fuertemente unida por redes familiares y comunitarias que sostienen gran parte de la economía local. A pesar de las brechas estructurales que enfrenta el territorio, especialmente en educación, conectividad digital, movilidad rural y acceso a empleo formal, se evidencia una disposición significativa de la población para capacitarse, emprender y transitar hacia modelos económicos más sostenibles y seguros. Este diagnóstico integral evidencia que La Unión, aunque marcada por la informalidad y la vulnerabilidad multidimensional, cuenta con recursos sociales y humanos valiosos que pueden fortalecer su desarrollo.

En este sentido, una recomendación central es el fortalecimiento de las capacidades locales mediante programas de formación ocupacional, reconversión laboral y certificación de saberes en articulación con el SENA, la Alcaldía Municipal y las organizaciones comunitarias. Estos procesos deben adaptarse a las condiciones específicas del territorio, especialmente para mujeres que tienen una alta carga de cuidado y para la población rural con limitaciones de movilidad. La formación debe priorizar áreas como el comercio local, la gestión de pequeños negocios, la transformación agrícola, los oficios comunitarios, la digitalización

básica y el mantenimiento de motocicletas, considerando que este medio de transporte es clave para la vida económica rural.

Asimismo, es fundamental impulsar proyectos productivos asociativos que permitan fortalecer la economía local mediante la organización colectiva. La creación de asociaciones de productores rurales, grupos de mujeres emprendedoras y colectivos comerciales puede mejorar la negociación de precios, reducir costos, ampliar mercados y facilitar el acceso a asistencia técnica y financiamiento. Este proceso debe acompañarse de formación administrativa, apoyo en formalización progresiva y vinculación a cadenas productivas existentes en el municipio como el café, el plátano y los productos agropecuarios. Otra recomendación estratégica consiste en consolidar un mecanismo permanente de articulación institucional que vincule a la Alcaldía, el SENA, el Ministerio de Minas y Energía y las Juntas de Acción Comunal. Esta mesa de trabajo territorial permitiría coordinar acciones de formación, emprendimiento y desarrollo productivo, garantizando continuidad, sostenibilidad y seguimiento técnico a los avances de reconversión económica. La articulación es clave para evitar la fragmentación de esfuerzos y para asegurar que los programas lleguen también a los corregimientos más dispersos.

Otro aspecto prioritario es la necesidad de desarrollar alternativas económicas sostenibles para las personas involucradas en la venta informal de combustibles. Esta práctica, aunque minoritaria, cumple un papel funcional en la movilidad rural, por lo que las alternativas deben ser graduales y respetuosas de las condiciones socioeconómicas de las familias. Entre las opciones se encuentran la reconversión hacia micrologística veredal, el fortalecimiento de tiendas rurales, servicios de movilidad comunitaria regulada, mantenimiento técnico de motocicletas y emprendimientos agroecológicos complementarios. Estas acciones deben ir acompañadas de campañas de seguridad y educación ambiental para reducir los riesgos asociados al manejo de combustibles.

También se recomienda promover la inclusión social y el enfoque diferencial en todas las estrategias implementadas. Las mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad deben participar activamente en los

programas de empleo y emprendimiento, garantizando igualdad de oportunidades y pertinencia cultural. En el caso de las mujeres rurales, es indispensable considerar las dificultades de movilidad, la carga de cuidado y la disponibilidad limitada de tiempo, elementos que deben ser contemplados en el diseño de la oferta institucional. Finalmente, se sugiere integrar los hallazgos de esta caracterización en los instrumentos de planificación territorial, como el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto permitirá orientar inversiones hacia sectores estratégicos, mejorar la infraestructura rural, fortalecer la movilidad, ampliar la conectividad digital y garantizar espacios productivos adecuados para la comunidad. Adicionalmente, se recomienda implementar un sistema local de monitoreo y evaluación que permita medir el impacto social, económico y ambiental de los programas implementados, construido de manera participativa con juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias y entidades locales.

En conjunto, estas recomendaciones buscan potenciar las fortalezas existentes en La Unión, cerrar brechas históricas y promover un desarrollo territorial que mejore las condiciones de vida de la población, reconociendo su diversidad, sus capacidades y su profundo arraigo comunitario.

3. Recomendaciones Finales Municipio de San Pablo

El proceso de caracterización territorial desarrollado en el municipio de San Pablo evidencia un territorio profundamente rural, con un tejido comunitario fuerte, pero con limitaciones estructurales que afectan las condiciones de vida de sus habitantes. La dispersión geográfica, la baja escolaridad, la informalidad laboral, la pobreza multidimensional y la afectación histórica del conflicto armado condicionan las posibilidades de desarrollo y requieren intervenciones diferenciadas, adaptadas a la realidad territorial del municipio. A partir de los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones estratégicas para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo, seguro y sostenible.

En primer lugar, es fundamental fortalecer las capacidades locales mediante formación laboral pertinente y descentralizada, priorizando áreas que respondan a

la vida económica cotidiana del territorio, como mecánica de motos, logística rural, agricultura sostenible, cocina, comercio y oficios prácticos. Estas acciones deben desplegarse mediante jornadas móviles, formación veredal, certificación de saberes y cursos cortos que permitan superar las barreras de movilidad y tiempo que enfrentan mujeres jefas de hogar, agricultores, transportadores y jóvenes rurales. La articulación con el SENA, instituciones educativas y organizaciones comunitarias será clave para garantizar cobertura y pertinencia.

De igual manera, se recomienda impulsar estrategias de reconversión económica progresiva para la población vinculada a la venta informal de gasolina. Este fenómeno, profundamente arraigado en San Pablo debido a la falta de estaciones de servicio en veredas y a la alta dependencia de la motocicleta, no puede abordarse con una mirada punitiva. Las alternativas deben incluir capacitación en mecánica, emprendimientos rurales relacionados con movilidad, modelos seguros de abastecimiento comunitario, y el fortalecimiento de iniciativas colectivas de transporte. Una transición de este tipo debe ser gradual, acompañada y respetuosa de las dinámicas económicas actuales.

En tercer lugar, se recomienda fortalecer la asociatividad y las redes económicas comunitarias, aprovechando el capital social existente en las veredas. Las mingas, la mano cambiada, las redes familiares y las Juntas de Acción Comunal ya funcionan como estructuras de cooperación, pero requieren fortalecimiento para evolucionar hacia asociaciones productivas capaces de acceder a asistencia técnica, recursos públicos y mercados más estables. El acompañamiento en procesos administrativos, la formación en gestión organizativa y la creación de circuitos de comercialización local pueden potenciar el desarrollo económico de las veredas.

Asimismo, es clave mejorar la infraestructura y la conectividad rural. El estado de las vías terciarias y la distancia entre las veredas y la cabecera municipal limitan el acceso a educación, salud, mercados y oportunidades laborales. Priorizar el mejoramiento de caminos veredales, la conectividad digital comunitaria y los sistemas de transporte rural permitirá reducir costos, facilitar la movilidad, fortalecer

emprendimientos y disminuir la dependencia de prácticas como la venta informal de combustibles.

Se recomienda también implementar estrategias de apoyo integral a víctimas del conflicto armado y hogares con discapacidad, quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad económica y social. Esto incluye asistencia psicosocial, acceso preferente a programas de formación, apoyo para emprendimientos familiares y articulación con rutas de reparación y protección institucional. La inclusión social debe ser un eje transversal en el diseño de programas de empleo, emprendimiento y reconversión laboral.

Finalmente, se sugiere consolidar un mecanismo permanente de articulación interinstitucional entre la Alcaldía, el SENA, la Gobernación de Nariño, las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones de mujeres y otros actores locales. Esta instancia debe orientar la planificación territorial con enfoque rural, coordinar la oferta de programas, garantizar la continuidad de las iniciativas de formación y reconversión, y promover una agenda de desarrollo que responda a la realidad veredal de San Pablo. La planificación municipal debe integrar los hallazgos de esta caracterización en el Plan de Desarrollo y en la toma de decisiones locales, asegurando que la inversión pública llegue de manera equitativa a los sectores rurales más afectados por el aislamiento y la pobreza.

En conjunto, estas recomendaciones permiten trazar una ruta estratégica que reconoce la complejidad del territorio y la fuerza de la comunidad sanpableña. La clave está en diseñar procesos adaptados a la ruralidad, fortalecer capacidades locales, acompañar de manera gradual la transición económica y convertir el interés existente por aprender en una verdadera oportunidad para transformar el futuro del municipio.

4.Recomendaciones Finales Municipio de El Contadero

El análisis del municipio de El Contadero muestra la necesidad de impulsar estrategias de desarrollo que reconozcan las particularidades de un territorio profundamente rural, disperso y con fuerte identidad campesina. En este escenario, la formación y la capacitación surgen como herramientas esenciales para fortalecer

las capacidades locales. Es fundamental promover procesos educativos prácticos, descentralizados y adaptados a la vida agrícola, que puedan llevarse a cabo en veredas y espacios comunitarios, facilitando el acceso de mujeres, jóvenes y agricultores. La articulación con entidades como el SENA debe orientarse a programas flexibles y de corta duración, que respondan a los oficios y actividades que realmente sostienen la economía familiar.

La diversificación económica también es clave para el municipio. El Contadero se apoya en cultivos tradicionales de pequeña escala, por lo que es importante acompañar a los hogares en procesos de tecnificación básica, manejo sostenible de suelos, fortalecimiento de cadenas cortas de comercialización y transformación artesanal de productos. Este enfoque permitirá mejorar ingresos, reducir la vulnerabilidad económica y dar valor agregado a la producción local. Sin embargo, estos procesos deben ir acompañados de asistencia técnica y formación en administración rural para asegurar su sostenibilidad.

El rol de las Juntas de Acción Comunal es central para el desarrollo local. Estas organizaciones comunitarias son la puerta de entrada para la gestión de proyectos, la coordinación de actividades veredales y la articulación con la administración municipal. Fortalecer sus capacidades administrativas, de gestión y resolución de problemas permitirá que accedan a recursos, impulsen proyectos productivos y mantengan una presencia constante en el desarrollo territorial. Su consolidación es esencial, especialmente en un municipio donde la dispersión geográfica dificulta la acción institucional directa en todas las veredas.

La movilidad rural, altamente dependiente de vías terciarias en mal estado, requiere atención prioritaria. Mejorar caminos, facilitar transporte comunitario y gestionar maquinaria para el mantenimiento periódico de las vías permitirá disminuir costos de transporte, mejorar el acceso a salud y educación, y facilitar que la población participe en procesos de formación y comercialización. Una movilidad más estable también permitirá reducir la dependencia de prácticas informales vinculadas al abastecimiento de combustibles en veredas alejadas.

La atención a población vulnerable debe ser integral y permanente. Hogares en pobreza multidimensional, víctimas del conflicto armado, personas con

discapacidad y mujeres jefas de hogar requieren acompañamiento psicosocial, acceso preferente a programas formativos y apoyo para iniciativas productivas sostenibles. La articulación de brigadas de salud, educación financiera básica y rutas de atención diferenciadas permitirá reducir brechas y responder a necesidades que se intensifican en las zonas más alejadas del territorio.

La asociatividad productiva debe fortalecerse como estrategia para potenciar la economía local. A pesar del fuerte capital social que caracteriza al municipio, las organizaciones formales de productores son pocas y requieren acompañamiento técnico para consolidarse. Impulsar grupos de emprendedores rurales, mujeres productoras y asociaciones agrícolas puede aumentar la capacidad de negociación, abrir oportunidades de comercialización y facilitar el acceso a apoyos institucionales.

El emprendimiento rural es otra oportunidad estratégica para El Contadero. Promover rutas de emprendimiento adaptadas al territorio, incluyendo formación, acompañamiento personalizado, capital semilla y espacios de comercialización, esto permitirá que los hogares transformen actividades informales en iniciativas sostenibles. Así mismo, ferias campesinas, mercados veredales e iniciativas de venta directa pueden dinamizar la economía local y fortalecer la circulación interna de productos.

Finalmente, la presencia institucional en las zonas rurales dispersas debe reforzarse. Es indispensable llevar programas de formación, salud, bienestar social y apoyo productivo directamente a las veredas, garantizando continuidad en la intervención y evitando que los hogares más alejados queden excluidos de la oferta pública. Una articulación permanente entre la administración municipal, las Juntas de Acción Comunal y entidades regionales permitirá avanzar hacia un modelo de desarrollo que reconozca el carácter rural del municipio y promueva oportunidades reales de mejora en las condiciones de vida